

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DE PASTO

Sentencia número 003

San Juan de Pasto, dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020)

Referencia:	PROCESO DE RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS
Solicitante:	JUANITO HUMBERTO LAGOS LÓPEZ
Opositor:	
Radicado:	52001312100220160034100

I. Asunto:

Procede el Despacho a decidir la solicitud de restitución y formalización de tierras, presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – Territorial Nariño (en adelante UAEGRTD)¹ en nombre y a favor del ciudadano Juanito Humberto Lagos López, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes – Nariño, respecto del inmueble denominado "EL PLAN - SAN FRANCISCO", ubicado en la Vereda San Francisco, del Corregimiento La Planada, del Municipio de Los Andes Sotomayor, del Departamento de Nariño, que hace parte de uno de mayor extensión, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño.

II. Antecedentes:

1. Síntesis de la solicitud de restitución, formalización y reparación e intervenciones.

1.1. La Solicitud.

¹ Representación que se da en los términos de los artículos 81, 82 y 105 numeral 5 de la Ley 1448 de 2011, otorgada mediante Resolución No. RÑ 02730 del 1 de diciembre de 2016. (Fol. 20).

1.1.1. Pretensiones.

La UAEGRTD, formuló acción de restitución de tierras a favor del señor Juanito Humberto Lagos López, y de su núcleo familiar, conformado para la época del desplazamiento por su compañera permanente hoy cónyuge, Ana Lucely Rojas Lagos, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.089.243.627 expedida en Los Andes - Nariño y su hija Darlin Yulied Lagos Rojas, identificada con tarjeta de identidad No. 1.087.728.109 expedida en Los Andes - Nariño pretendiendo sucintamente, se proteja su derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras; se declare que el solicitante y su cónyuge son poseedores del inmueble denominado "*EL PLAN - SAN FRANCISCO*", ubicado en la Vereda San Francisco, del Corregimiento La Planada, del Municipio de Los Andes Sotomayor, del Departamento de Nariño, el cual tiene un área de 0 hectáreas y 716 mts², cuyas coordenadas georreferenciadas y linderos se indicaron en el escrito introductorio, el cual hace parte de uno de mayor extensión que se encuentra registrado a folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño, y se decreten a su favor las medidas de reparación integral tanto de carácter individual como colectivas contempladas en la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes.

1.1.2. Fundamentos fácticos de la solicitud.

1. La apoderada judicial inicial del solicitante, expuso el contexto general del conflicto armado en el Municipio de Los Andes Sotomayor y particularmente del evento de desplazamiento forzado del que fue víctima en el año 2006, debido a enfrentamientos entre la guerrilla y paramilitares, evento en el cual estuvo retenido y amarrado por los últimos de los referidos por espacio de un día. Así, se esgrime que, para el 3 de noviembre de 2006, el actor se vio obligado a salir de su casa de habitación ubicada en el predio que hoy se reclama en restitución y dejar todo abandonado, se desplazó hacia el casco urbano del Municipio de Los Andes donde la señora Rosa Zambrano, lugar en el que permaneció alrededor de dos semanas, para luego regresar nuevamente a su casa con su familia, situación está que se verifica hasta la fecha.

2. Respecto de la adquisición del predio *"EL PLAN - SAN FRANCISCO"*, señaló que fue por compra verbal realizada al padre del actor, señor Placido Andrés Lagos entre los años 1999 y 2000. Dicho negocio jurídico no fue elevado ni a escritura pública ni a documento privado, se hizo verbalmente. Desde el momento en que adquirió el fundo, el solicitante construyó su casa de habitación en él y le sembró café y plátano.

3. Expresó que el solicitante presentó ante la UAEGRTD el 15 de febrero de 2015, solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente respecto a un derecho de posesión ejercido sobre el fundo denominado *"EL PLAN - SAN FRANCISCO"*, allegando como soporte de su solicitud copia de la Escritura Pública No. 198 de septiembre 18 de 1977 de la Notaría del Círculo de Los Andes Sotomayor – Nariño, situación que motivó la consulta en el aplicativo de la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, por los nombres y apellidos de las personas citadas en la referida escritura, encontrando que el inmueble se relaciona registralmente con el folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño y se identifica con cédula catastral No. 52-418-00-00-0000-6872-000 del IGAC, que pertenece a un predio ubicado en el Departamento de Nariño, en el Municipio de Los Andes Sotomayor, en la Vereda San Francisco y quien figura inscrito es el señor Placido Lagos, quien lo adquiere a través de compraventa parcial protocolizada en la citada Escritura Pública No. 198, de la señora Fidelina Zambrano a quien se le adjudicó el bien por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego en el juicio sucesoral de los causantes Rubén Lagos y Gumercinda Toro, registrado el 27 de marzo de 1974 a folios 38, a partida 42, número 209 del Libro I Tomo II.

4. En síntesis manifestó que se encuentra plenamente acreditado que el solicitante es víctima de desplazamiento forzado, pues dejó abandonado su predio *"EL PLAN - SAN FRANCISCO"*, dentro del período estipulado por el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, lo cual conllevó a una desatención del mismo, limitando de manera ostensible y palmaria su relación con la tierra. En razón de ello adujo que el actor se encuentra plenamente legitimado para solicitar, en el marco de la justicia transicional, que se decreten en su favor medidas de formalización y las de vocación transformadora a que hubiere lugar.

1.2. Intervenciones.

1.2.1. Ministerio Público.

El Ministerio Público rindió concepto al interior del asunto, en el que se refirió a la solicitud de formalización y restitución de tierras presentada por el señor Lagos López, al trámite impartido por el Despacho, a la competencia y al procedimiento.

Planteó en su escrito el problema jurídico, exponiendo entre sus consideraciones los requisitos adjetivos y sustanciales, encontrando acreditada la condición de víctima por desplazamiento forzado del solicitante, de conformidad con las declaraciones arrojadas al plenario, el informe de caracterización y el informe de contexto en el que dice se condensa el resultado de la información acopiada a partir de la cartografía social recogida por profesionales del área social y jurídica de la Unidad llevada a cabo en el municipio de Los Andes.

A continuación hizo referencia a la relación jurídica del solicitante con el predio, indicando en punto a los antecedentes registrales del fundo objeto de la solicitud de restitución que consultada la información registral SNR de la página web de la Oficina de Registro, tomando como variables los nombres y números de identificación pudieron determinar que el predio se encuentra inscrito bajo el folio de matrícula inmobiliaria 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego, identificado con el número catastral 52-418-00-00-0000-6872-000.

Señaló que del análisis de la Escritura Pública número 198 se puede afirmar que el predio objeto del proceso hace parte de uno de mayor extensión denominado "*San Francisco*" de propiedad de la señora Fidelina Zambrano, quien posteriormente vende al señor Plácido Lagos.

Encontró así que el predio se encuentra debidamente individualizado y que corresponde a un bien de dominio privado.

Dijo que los actos de mando del solicitante sobre el fundo se demostraron con las pruebas testimoniales arrimadas, destacándose que los mismos se hicieron de manera pública, pacífica e ininterrumpida y que el requisito de temporalidad exigido por la Ley 1448 de 2011 se encuentra cumplido.

Consideró con fundamento en lo expuesto que se deben acceder a las súplicas de la demanda y por tanto la restitución y formalización se deben realizar a nombre del solicitante conforme lo indica el parágrafo 4 del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

1.2.2 Titular de derechos reales Plácido Andrés Lagos.

El titular de derechos reales inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño, señor Plácido Andrés Lagos, en escrito dirigido a este Despacho manifestó que no se opone a la presente solicitud de restitución y formalización de tierras interpuesta por su hijo Juanito Humberto Lagos López. (Fol. 162 a 163).

1.2.3 Titular de derechos reales María Fidelina Zambrano.

La titular de derechos reales María Fidelina Zambrano a través de representante judicial designada por este Despacho, Ángela Yissel Erazo Urbina, da oportuna contestación al escrito genitor, manifestando frente a los hechos de la solicitud de restitución, que son ciertos los del numeral primero y séptimo y que no le constan los demás, por lo que se atiene a lo que resulte probado dentro del sub judice y en todo caso que no se opone a las pretensiones de la demanda. (Fol. 164 a 170).

2. Trámite Impartido.

La demanda de restitución y formalización de tierras fue repartida a este Despacho Judicial el día 2 de diciembre de 2016 (Fol. 98). Mediante auto interlocutorio calendado a 7 de febrero de 2017, se dispuso admitirla de conformidad con lo ordenado por el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, poniendo en conocimiento el asunto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de

Samaniego - Nariño; a La Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor - Nariño y al Ministerio Público (Fol. 102 a 104). Del mismo modo se reconoció personería al profesional del derecho encargado de representar los intereses de la parte solicitante.

En auto de 8 de septiembre de 2017, se dispuso vincular al trámite a la titular de derechos reales inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño, señora Fidelina Zambrano, como tercera y eventual opositora a través de la UAEGRTD y glosar al expediente la publicación del aviso ordenada en auto admisorio de la demanda. (Fol. 128).

Con proveído de 7 de diciembre de 2017, se ordenó el emplazamiento de la señora Fidelina Zambrano, toda vez que se manifestó por el solicitante ante la UAEGRTD desconocer su ubicación y paradero, se ordenó además vincular al sub judice al señor Plácido Lagos como titular de derechos reales inscritos en el multicitado folio No. 250-1278 a través de la UAEGRTD. (Fol. 132).

A través de providencia de 22 de marzo de 2018 se designó a la abogada Cristina Alejandra Luna Cualpa como representante judicial de la titular Fidelina Zambrano, por cuanto se arrimó al plenario la publicación de su emplazamiento y a folios 137 a 138, la que se publicó en el Registro Nacional de Personas Emplazadas del Consejo Superior de la Judicatura, sin que se verificara comparecencia alguna después de transcurrido el término que establece el artículo 108 del C. G. del P. para tales efectos; así mismo se dispuso requerir a la UAEGRTD, con el objeto de que acate lo dispuesto en auto de 7 de diciembre de 2017 en cuanto a la notificación del titular Plácido Lagos. (Fol. 144).

En auto noviembre 1 de 2018, se ordenó practicar la diligencia de notificación personal de la presente demanda al señor Plácido Lagos, para lo cual se dispuso comisionar al Juzgado Promiscuo Municipal de Los Andes Sotomayor - Nariño; así mismo se ordenó relevar a la representante judicial designada y nombrar en su reemplazo a la abogada Ángela Yissel Erazo Urbina. (Fol. 150 a 151).

Con memorial de 5 de febrero de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Los Andes Sotomayor – Nariño devuelve el despacho comisorio No. 002 incluyendo la notificación de la presente demanda del vinculado Plácido Lagos (Fol. 157 a 163); así mismo, en escrito dirigido a este Despacho visible a folio 163, el referido titular manifiesta de manera voluntaria ***"NO me opongo al proceso de Restitución de Tierras de la referencia iniciado por mi hijo JUANITO HUMBERTO LAGOS LOPEZ identificad (sic) con cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes. Lo anterior en aras de que el proceso continúe con el trámite que en derecho corresponda (...)"***.

El 7 de octubre de 2019 en proveído interlocutorio, se dispuso por este Juzgado requerir a la Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor – Nariño a efectos de que conceptúe si el hecho de que el predio denominado ***"EL PLAN - SAN FRANCISCO"***, se halla ubicado en zona de riesgo categorizada como moderada o natural por fenómenos hidrometeorológicos, entorpece el sub lite, de otro lado se ordenó a la UAEGRTD publicar la admisión de la demanda de la referencia, teniendo en cuenta la identificación plena del bien perseguido en la misma, tener por contestada la demanda en debida forma por parte de la abogada Ángela Yissel Erazo Urbina, como representante judicial de la señora Fidelina Zambrano, teniendo en cuenta que no se formuló oposición alguna respecto a la restitución de tierras solicitada, y glosar al plenario el Despacho Comisorio No. 002 proveniente del Juzgado Promiscuo Municipal de Los Andes Sotomayor – Nariño. (Fol. 171 a 173).

Por intermedio de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el Municipio de Los Andes Sotomayor allega escrito, en donde esgrime que si bien la ubicación del predio denominado ***"EL PLAN - SAN FRANCISCO"***, no afecta ni entorpece el presente trámite judicial, es recomendable dar estricto cumplimiento a las recomendaciones que se encuentran en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado en julio de 2018 referente a riesgo por incendio. (Fol. 187 a 188).

La publicación de la admisión de la solicitud consignada en el aviso a que se refiere el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, se efectuó el día 19-20

de octubre de septiembre de 2019, en el diario La República (Fol. 185), después de haberse ordenado la repetición del edicto en auto interlocutorio No. 210 de 7 de octubre de 2019 (Fol. 171 a 173), por lo que transcurridos quince (15) días hábiles quedó surtido el traslado a las personas indeterminadas.

Vencido el término dispuesto por la norma para que comparezcan los posibles terceros u opositores a las pretensiones de Restitución, se encuentra que nadie se presentó, por lo que se tiene que en este asunto no hay opositores. En este orden de ideas, encontramos que se agotó debidamente la etapa de notificaciones y comunicaciones.

III. Consideraciones:

1. Sanidad procesal.

Examinada la actuación cumplida no se observa irregularidad procesal con suficiente entidad para tipificar nulidad procesal, razón por la cual el Despacho se encuentra facultado para decidir de fondo el asunto.

2. Presupuestos procesales.

Los presupuestos procesales que ameritan sentencia de mérito no ofrecen reparo alguno en este escenario procesal, en efecto la juez que conoce del caso es competente para decidir en única instancia el presente asunto de restitución y formalización de tierras, en razón de la ubicación del predio y la ausencia de oposiciones contra la solicitud.

La parte actora tiene capacidad para ser parte y comparecer al proceso por ser persona natural, mayor de edad y el escrito de demanda y sus anexos se ciñen a lo consagrado en la Ley 1448 de 2011.

3. Legitimación en la causa.

El solicitante está legitimado por activa, en tanto alegó ser poseedor del predio reclamado en restitución, el que dijo debió abandonar forzosamente en el año 2006, debido a hechos de violencia acaecidos en el Municipio de Los Andes Sotomayor, Corregimiento La Planada, Vereda San Francisco, con ocasión del conflicto armado interno.

En punto a la legitimación en la causa por pasiva, debe advertirse que en el presente asunto se convocó a los titulares de derechos reales inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño y se efectuó el llamamiento a personas indeterminadas.

4. Requisito de procedibilidad.

De conformidad con lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, *"La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución"*.

Revisado el plenario se observa que el requisito bajo estudio se encuentra acreditado, pues a folio 21 obra la Constancia de Inscripción del Predio en el Registro de Tierras Despojadas No. CÑ 00784 de 1 de diciembre de 2016, que habilita la presentación de la acción judicial.

5. Problema Jurídico.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si se encuentra probada la condición de víctima del solicitante, en el contexto del conflicto armado interno colombiano y de ser así, se analizará su relación jurídica con el predio objeto del proceso y si se cumplen a cabalidad los presupuestos constitucionales y legales para acceder a la restitución y formalización que se solicita, así como a las medidas de reparación integral tanto individuales como colectivas invocadas.

6. Restitución de tierras como derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado interno colombiano.

El conflicto armado interno cuyos inicios se remontan a la década de los 40, trajo consigo diversos factores de violencia en el territorio nacional, siendo los principales afectados la población civil y dentro de este sector, aquellos residenciados en las áreas rurales y grupos étnicos, quienes se han visto sometidos a graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a los cánones de los Derechos Humanos, normativas de obligatorio cumplimiento ya que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad consagrado en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política.

Debido a esta problemática, la Corte Constitucional intervino a través de diferentes pronunciamientos, con el fin de proteger a las personas afectadas. Es así como se construyó una línea jurisprudencial sólida por medio de la cual, entre otras cosas, se declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional, en relación a la infracción de los derechos de los desplazados, se construye el concepto de víctima del conflicto armado interno, se eleva a la categoría de derecho fundamental en materia de bienes, la restitución y formalización de tierras en el evento del despojo o abandono forzado y se obliga al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a legislar para replantear la política de tierras que existía hasta el momento y crear un procedimiento tanto administrativo como judicial que garantice los derechos de las víctimas, caracterizado por la ductilidad a favor de la víctima, en su condición de sujeto de especial protección.

Respecto a la connotación de fundamental del derecho a la restitución, el Alto Tribunal Constitucional ha dicho que *"En Colombia, la restitución de tierras es un derecho fundamental que permite a las víctimas del conflicto armado retornar a los predios que debieron abandonar por causa de la violencia. Esta garantía jurídica hace parte de las medidas de reparación que debe procurar el Estado, para alcanzar el "restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales"*.

Es así como se promulga la Ley 1448 de 2011, la que establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas dentro de un marco de justicia transicional, para hacer

² H Corte Constitucional, sentencia SU648 de 2017

efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. Así, la acción de restitución de tierras a la población despojada o desplazada víctima del conflicto interno colombiano, conlleva la garantía de reparación y del derecho fundamental a la restitución de tierras.

Valga señalar que son varios los tratados e instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que consagran que las víctimas de abandono y despojo de bienes tienen el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca su uso, goce y libre disposición; siendo del caso citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, los Principios Deng y los Principios Pinheiro.

Finalmente se tiene que, de conformidad con la ley en cita, para efectos de conceder las medidas de restitución y formalización de tierras se debe acreditar (i) la condición de víctima que deriva en despojo o abandono forzado de un inmueble, acaecido por la ocurrencia de un hecho con ocasión del conflicto armado interno, en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1991 y la vigencia de la ley, y (ii) la relación jurídica del solicitante con el predio reclamado.

7. Solución al problema jurídico planteado

7.1. La condición de víctima del señor Juanito Humberto Lagos López en el contexto del conflicto armado interno en la Vereda San Francisco, del Corregimiento La Planada, del Municipio de Los Andes Sotomayor, del Departamento de Nariño.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, son víctimas "(...) *aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con*

ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (...)."

De la norma transcrita se resalta la temporalidad para detentar la calidad de víctima, a partir del 1 de enero de 1985, y que las agresiones sufridas provengan de la infracción de normas de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, al seno del conflicto armado interno, excluyéndose los daños sufridos por actos atribuibles a delincuencia común.

La Corte Constitucional en la sentencia C-253 de 2012 consagró que la condición de víctima y los actos de despojo y abandono forzado de que trata el artículo 74 de la norma ibidem, son situaciones generadas por el conflicto armado interno, para cuya prueba no se exige la declaración previa por autoridad, además de tener en cuenta la flexibilización en los medios probatorios propios de la justicia transicional consagrada en la Ley 1448 de 2011, entre los cuales se enmarca las presunciones legales y de derecho, la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima, el valor de las pruebas sumarias y los hechos notorios, y el carácter fidedigno de aquellas que se aporten por la UAEGRTD.

En el caso concreto de la restitución de tierras las anteriores disposiciones legales deben acompasarse a lo consagrado en los artículos 75 y 81 ibidem, que señalan como titulares de dicho derecho a *"Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas"*

forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo” o en su defecto su cónyuge o compañero o compañera permanente con quien se convivía al momento que ocurrieron los hechos o ante su fallecimiento o desaparición, aquellos llamados a sucederlos en los órdenes que al respecto contempla el Código Civil.

Dicho lo anterior y a efectos de determinar la condición de víctima del solicitante, se debe analizar el Informe de Análisis de Contexto del Municipio de Los Andes Sotomayor, elaborado por el Área Social de la UAEGRTD (Fol. 97), el cual resulta del proceso de triangulación de la información primaria fundamentada en la voz activa de las víctimas, producto de las pruebas sociales aplicadas con las comunidades de los Corregimientos del Municipio, así como también la integración de testimonios pertenecientes a solicitudes y entrevistas, narrando detalladamente en cuanto a tiempo, modo y lugar la agudización del conflicto armado, el incremento de desplazamientos forzados de las familias y por ende el aumento de tierras abandonadas.

En el citado documento se establece que el arribo de los grupos armados al margen de la ley se verifica a principios de los años noventa, cuando el grupo guerrillero ELN, siendo el primer grupo ilegal en asentarse en el territorio, pretende persuadir a los pobladores para que se incorporen al conjunto armando, caracterizándose por ser un grupo beligerante y totalitario con la comunidad; posterior a ello se conoció de la presencia del grupo guerrillero de las FARC, a partir del año 1995, y finalmente desde el año 2004 se establece la presencia de los grupos de autodefensas, las que si bien en el año 2005 anunciaron su desmovilización, lo cierto fue que continuaron su actuar delincencial como bandas criminales denominadas Águilas Negras, Los Rastrojos y/o Nueva Generación.

Desde el año 2005, los actores armados delimitan su accionar en sectores del Municipio, conllevando ello a la instalación de artefactos explosivos, las extorsiones e incremento de homicidios de los moradores de las diferentes Veredas, la demarcación invisible de caminos, cerros e incluso Veredas, donde los miembros de los grupos ejercían el poder y el monopolio de las armas,

frecuentándose los enfrentamientos entre cada actor y por lo tanto generándose desplazamientos individuales y masivos.

Se expuso que durante años se presentaron enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y paramilitares, que fueron presenciados por la población civil, quienes se acostumbraron a dicha situación y a sus consecuencias; sin embargo, para los días 26 de febrero de 2006 en el Corregimiento El Carrizal, y 26 de marzo, 30 de octubre y 1 de noviembre de 2006 en La Planada se verificaron desplazamientos masivos.

De manera específica se refiere que entre el 22 y el 26 de febrero de 2006, 176 familias y 740 personas, se desplazaron hacia el casco urbano del Municipio de Los Andes Sotomayor, tras enfrentamientos entre miembros de la guerrilla de las FARC y autodefensas; que de acuerdo al Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoria del Pueblo se indica que a partir del 18 de febrero de 2006, se presentaron combates entre el ELN y el grupo ilegal Nueva Generacion en la Vereda Cordilleras Andinas entre otras.

De otro lado el 24 y 25 de marzo de 2006, se verificaron conflictos entre la Organización Nueva Generación y las guerrillas de las FARC y el ELN en los Corregimientos de Pigaltal y La Planada, obteniendo en esa oportunidad un desplazamiento de 175 familias y 703 personas, entre ellas 99 niños y niñas menores de 7 años de edad. Finalmente, para el 29 de octubre de 2006 incursionaron en el Corregimiento de La Planada numerosos miembros del ELN, suscitándose un nuevo enfrentamiento con las Autodefensas Campesinas Nueva Generación.

Congruente es la información descrita en precedencia con lo recopilado en los Informes de Caracterización de Solicitantes y sus Núcleos Familiares (Fol. 30 a 33) y en el Técnico de Recolección de Pruebas Sociales (Fol. 34 a 35) elaborado por la misma Área de la URT, en el cual, a través de una entrevista a profundidad realizada al solicitante, se narran de manera particular los hechos que originan su desplazamiento, mencionando los distintos grupos armados ilegales que operan en la región, entre ellos, paramilitares y guerrilla de las FARC, además de referir

de manera clara las causas por las cuales el reclamante decide abandonar el predio que hoy solicita se le restituya.

En este orden de ideas, y tomando como punto de partida lo narrado por el señor Lagos López respecto de su desplazamiento, encontramos que señaló en lo pertinente: ***"(...) yo Salí desplazado de la vereda el San Francisco, municipio de los Andes, (...) yo Sali el día 3 de noviembre de 2006 (...) ese día hubo un combate entre la guerrilla y los paracos unos estaban desde un lado de la planada y otros desde la vereda San Francisco, nosotros vivíamos al frente de donde estaban atacando, por eso tuvimos que salir todos los de la vereda (...) yo salí con mi mujer y mi hija, aquí salimos hasta Sotomayor, ahí llegamos a la casa de una familiar de nombre ROSA ZAMBRANO, mi esposa si permanecía en el albergue por eso a ella si la inscribieron a mí no que por que no me había quedado ahí, permanecemos como dos semanas y luego ya regresamos a la vereda, en esos días yo estaba en una tienda de la vereda, cuando me cogieron los paras, y me amenazaron en una pieza, donde quedaban los billares, me quitaron la cedula y me acusaban de ser vocero de la guerrilla, me preguntaban cosas, y me tuvieron desde las cuatro hasta las 7 de la noche, luego llego el comandante alias Polanco, y me pregunto otro poco de cosas, y como se dieron cuenta que no sabía nada me soltaron y me dijeron que me presente al otro día, pero yo no fui, desde ahí no me han amenazado mas, (...)"*** (Fol. 46 a 49). Sobre el mismo tópico en el Informe de Caracterización de Solicitantes y sus Núcleos Familiares y en el Técnico de Recolección de Pruebas Sociales, en donde se expone todo lo relacionado con la llegada de los grupos armados al margen de la ley al Municipio de los Andes Sotomayor, en concreto de las FARC y de la guerrilla del ELN y los enfrentamientos entre los mismos y con posterioridad de estos con grupos paramilitares, como motivos que dieron lugar al desplazamiento del sector del actor, este manifestó: ***"EN ESE TIEMPO EN LA VEREDA SAN FRANCISCO ESTABAN LOS PARAMILITARES Y LA GUERRILLA, ESTABAN LAS FARC. (SIC) O SEA QUE EN ESE TIEMPO SIEMPRE A DONDE VIVÍAMOS NOSOTROS TODA LEY TENÍA QUE LLEGAR A ESE PUNTO, AHÍ DONDE VIVO YO SIEMPRE ES LA PARTE MÁS ALTA Y ES VISTOSO PARA LAS VEREDAS, POR ESO A ELLOS LES GUSTABA ESE PUNTO DE LLEGAR AHÍ. ELLOS LLEGABAN A AMONTONARSE TODITOS, UNA VEZ ME PIDIERON LAS LLAVES, AHÍ DONDE YO PARA ELLOS METERSE AL GUSTO DE ELLOS"*** sobre la fecha del desplazamiento

del 3 de noviembre de 2006, manifestó: *"LA PLOMACERA FUE ENTRE PIGALTAL Y LA VEREDA SAN FRANCISCO, ESOS DIAS FUE QUE TIRABAN CILINDROS, Y DE TODO, DISPARABAN DE UN LADO Y DEL OTRO, Y AHÍ SIGUIERON TODA LA NOCHE Y AL OTRO DÍA POR LA MAÑANA YA EMPEZÓ LA GENTE DEL PIGALTAL, LA PLANADA, SAN FRANCISCO, TODITOS A SALIR YA PARA ACÁ, Y DE AHÍ PUES YA NOS TOCÓ SALIR TODOS PORQUE YA DIJERON QUE TOCABA DESALOJAR ESO. ESE DÍA FUE POR LA NOCHE QUE EMPEZÓ Y HASTA EL OTRO DÍA, ESO POR AHÍ HA DE VER SIDO DE LAS CINCO DE LA TARDE EN ADELANTE, ESE ENFRENTAMIENTO FUE ENTRE LA GUERRILLA Y LOS PARACOS. ESO FUE EN NOVIEMBRE DE 2006 EL 3. YO ESTABA EN LA CASA DONDE VIVÍA YO CON LA MUJER Y LOS HIJOS CUANDO COMENZÓ EL COMBATE. EN LA CASA NOS METIMOS AHÍ Y DESPUÉS AL OTRO DÍA QUE YA AMANECIÓ SALIMOS AL CENTRO A LA CARRETERA, A LA CENTRAL Y CUANDO YA EMPEZARON A SALIR TODOS Y EMPEZARON A DECIR QUE YA TOCABA SALIR NOS TOCÓ TAMBIÉN SALIR ATRÁS DE TODOS A PIE "*. (Fol. 30 a 35).

El anterior relato se apoya con los testimonios rendidos por José Ramiro Lagos López, quien, si bien es hermano del solicitante, manifiesta que funge como testigo de la presente causa, por cuanto es colindante del actor. Sobre su desplazamiento esgrime: *"(...) Él salió desplazado de la Vereda San Francisco. Él vivía en otro predio, en el que tienen la casa, ese creo que le tiene puesto como "EL PLAN". El se desplazó en noviembre del año 2006, ellos salieron aquí a Sotomayor, ellos llegaron donde una tía llamada Rosa Zambrano, ahí se estuvo como 8 días, cuando él salió de la casa, él ya tenía ese predio como unos 15 años (...) Las razones del desplazamiento fue porque en esa época hubo un enfrentamiento con la guerrilla y paramilitares, entre las veredas Pigaltal y San Francisco, y la Planada. A él lo cogieron unos paramilitares y lo tuvieron (SIC) amarrados un día completo, no se porque razón lo tenían amarrado. (...) "* (Fol. 52 a 53) y por Plácido Andrés Lagos, quien esgrime que, si bien es el papá del solicitante, actúa como testigo del sub judice, por cuanto fue él quien le dio el predio que se reclama en restitución. Así, cuando se le cuestionó sobre el desplazamiento del actor, señaló: *"(...) El salió desplazado acá al Municipio, es que él ya tenía la casita, él en ese tiempo salió con la esposa y las niñas, llegamos al parque de Sotomayor, ahí no me doy cuenta, pero me parece que fueron 8*

días o 15 días los que (SIC) estuvieron ahí. (...) Las razones de ese desplazamiento fue (SIC) porque una balacera entre los paracos y la guerrilla, a Juanito Humberto, lo tuvieron amarrado los paracos, como amenazándolo de que lo iban a matar, eso no se supo porque, lo tuvieron unas horas amarrado. (...)” (Fol. 54 a 55).

Los elementos probatorios referidos, dan cuenta del desplazamiento forzado, del que fue víctima el solicitante, ello sumado a lo consignado en el Análisis de Contexto del Municipio de Los Andes Sotomayor (Fol. 97) y en el Informe de Caracterización de Solicitantes y sus Núcleos Familiares visible a folios 30 a 33, en donde se indica que: *"el solicitante tiene stress postraumático por los hechos vividos, manifestándose en ansiedad generalizada, sin embargo, aporta información relevante sobre la dinámica del conflicto en la vereda San Francisco, describiendo accionares, tiempo, modo y lugar de los hechos vividos. Se concluye que al presentarse desplazamiento el solicitante desatendió el predio en solicitud, ya que era su casa de habitación, manifestándolo así: "Quedó abandonado...No, no dejé a nadie" (...)”* forman el convencimiento del Juzgado sobre que el peticionario fue desplazado directamente por el conflicto armado, lo que lo obligó a abandonar su predio denominado *"EL PLAN - SAN FRANCISCO"*, ubicado en la Vereda San Francisco, del Corregimiento La Planada, del Municipio de Los Andes Sotomayor, por lo que ostenta la calidad de víctima.

Se arriba a la anterior conclusión a pesar de que en el expediente reposa copia de la Resolución No. 2014-598672 del 3 de septiembre de 2014, proferida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por medio de la cual se ordena no incluir al señor Juanito Humberto Lagos López y a los miembros de su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas y no reconocer el hecho victimizante de secuestro y desplazamiento forzado (Fol. 25 a 29), como quiera que no cuenta con elementos como son amenazas o coacción que lo generen y por tanto no se evidencia que tal hecho este relacionado con el conflicto armado sumado a que no se verificó ningún soporte o registro documental que permita evidenciar la ocurrencia de los hechos de secuestro y posterior desplazamiento forzado de los que señala el actor fue víctima y que tales hechos estén relacionados con el conflicto armado; pues además de que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido que las víctimas pueden acreditar el

daño por cualquier medio aceptado y probar *"de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba."* (Sentencia T-092 de 2019), también se ha dejado sentado que el RUV no define u otorga la condición de víctima.

Así, en la sentencia T-290 de 2016 se expresó:

"Si bien el Registro Único de Víctimas absorbió el Registro Único de Población Desplazada que regulaba el artículo 4º del Decreto 2569 de 2000, ésta población es solo una parte dentro del universo de víctimas que integra el RUV y que son destinatarias de las medidas establecidas en la Ley 1448 de 2011, sin que el RUV constituya una base de datos de toda persona víctima de un acto de violencia, en tanto el artículo 3 de la citada ley delimita el grupo de víctimas para las cuales se ha establecido el mencionado instrumento, como quedó consignado en el acápite anterior."

La Corte Constitucional ha señalado que el Registro Único de Víctimas (RUV) es una herramienta de carácter técnico, que no define u otorga la condición de víctima, sino que la reconoce para efectos de identificar a los destinatarios de determinadas medidas encaminadas a la protección, respeto y garantía de sus derechos. Por ello se ha sostenido que la condición de víctima del conflicto armado interno genera el derecho a ser registrada como tal de forma individual o con su núcleo familiar."

No cabe duda entonces, que con ocasión a los enfrentamientos acaecidos entre los distintos grupos delincuenciales, se generó un temor fundado en el solicitante, quien en aras de salvaguardar su vida y la de su núcleo familiar, se vio en la imperiosa necesidad de abandonar el predio sobre el cual, según se verá más adelante, ejerce posesión.

De todo lo dicho, emerge sin dificultad, que está debidamente probado dentro del expediente que el señor Juanito Humberto Lagos López y su núcleo familiar que al momento del desplazamiento estaba conformado por su hoy cónyuge Ana Lucely Rojas Lagos y por su hija Darlin Yulied Lagos Rojas, fueron víctimas de

desplazamiento forzado, al paso que se vieron obligados a abandonar su predio, lo cual le imposibilitó ejercer su uso y goce por algún tiempo, con todas las repercusiones psicológicas, familiares, sociales y económicas que ello conlleva, esto, sumado a que el hecho victimizante ocurrió en el año 2006, hay lugar en principio, desde la temporalidad que exigen los artículos 3 y 75 de la Ley 1448 de 2011, a la respectiva restitución y reparación integral de sus derechos.

7.2. Relación jurídica del señor Juanito Humberto Lagos López con el predio a formalizar.

Conforme se expone en la solicitud de formalización y restitución de tierras presentada por la UAEGRTD, si bien se señala que el predio pretendido denominado "*EL PLAN - SAN FRANCISCO*", fue adquirido por el solicitante por compra realizada de manera verbal a su padre Plácido Andrés Lagos entre los años 1999 y 2002 y en el Informe Técnico Predial y en las declaraciones del solicitante y de sus testigos, se constata que el predio se adquirió por el actor por donación de su padre, lo cierto es que a la luz del derecho, no se observan cumplidos los requisitos legales establecidos en los artículos 673 y 1857 inciso 2 del Código Civil - *título y modo* - para determinar que el señor Juanito Humberto, adquirió a través de donación la titularidad del derecho de dominio del inmueble.

Ahora bien, frente al antecedente registral y la tradición jurídica del predio, según las pruebas recaudadas en la etapa administrativa, se tiene que el mismo hace parte de otro de mayor extensión identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño, denominado "*SAN FRANCISCO*" que registra como primera anotación la Escritura Pública No. 198 del 18 de septiembre de 1977 de la Notaria Única de los Andes, bajo la especificación "*COMPRAVENTA PARCIAL*"; efectuada por la señora Fidelina Zambrano a favor del señor Plácido Lagos (Fol. 42 a 45). De dicho documento se extrae que el predio de mayor extensión reporta un área de 3 hectáreas y del registro que le antecede se constata que la vendedora adquirió el bien por compra a la señora Justina Lagos, quien a su vez adquirió en juicio de sucesión de los causantes Rubén Lagos y Gumersinda Toro, que se adelantó en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Samaniego – Nariño a través de providencia

de 6 de noviembre de 1973 y se registró el 27 de marzo de 1974 a folios 38 a 42, partida número 209 del Libro I, Tomo II.

Lo anterior es concordante con el análisis realizado por la UAEGRTD dentro del Informe Técnico Predial del bien (Fol. 61 a 66) en el que se establece que consultado el aplicativo del Sistema de Información Registral, se reporta el número de matrícula inmobiliaria 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego - Nariño, que pertenece a un predio de mayor extensión identificado catastralmente con el No. 52-418-00-00-00-0000-6872-0-00-00-0000 cuya titularidad de dominio es detentada por el vinculado Plácido Andrés Lagos a quien se señala como padre del solicitante y que le donó la porción que de dicho predio se pretende formalizar, todo ello fue considerado dentro del trámite administrativo que culminó con la inclusión del fundo pretendido en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Fol. 21).

En mérito de lo expuesto, encontramos que el bien solicitado reporta antecedente registral, por lo que se considera de naturaleza privada y por ende resulta susceptible de posesión y de usucapión.

7.3. Presupuestos para ordenar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a favor del señor Juanito Humberto Lagos López, como mecanismo de formalización de restitución de tierras.

El artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 señala que en el caso en que la solicitud de restitución verse sobre derechos de posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de pertenencia, en tal sentido refiere el principio de seguridad jurídica cuando insta a que se propenda por la titulación de la propiedad como medida de restitución y formalización.

En términos generales, el artículo 2512 del Código Civil establece la prescripción como: *"un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás*

requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción."

Teniendo en cuenta que a través de la prescripción adquisitiva de dominio se formaliza la posesión en los términos de la Ley 1448 de 2011, el análisis que se efectuará en el sub judice se centrará en aquella modalidad de prescripción que permite adquirir. Así las cosas, encontramos que la prescripción adquisitiva, llamada también usucapión, reglamentada por el artículo 2518 del Código Civil, es un modo de ganar el dominio de las cosas corporales ajenas, muebles o bienes raíces, y los demás derechos reales susceptibles de ser apropiados por tal medio, cuya consumación precisa la posesión de las cosas sobre las cuales recaen tales derechos, en la forma y durante el plazo requerido por la ley.

De conformidad con lo expresado en el artículo 2527 ibidem, la prescripción adquisitiva puede asumir dos modalidades: Ordinaria, cuya consumación está precedida de justo título, y extraordinaria apoyada en la posesión irregular, para la que no es necesario título alguno (artículos 764, 765, 2527 y 2531 Código Civil).

En ambos casos, - ordinaria y extraordinaria - la prescripción adquisitiva requiere para su configuración legal, como lo ha señalado la Corte Suprema en su Sala de Casación Civil y Agraria, de los siguientes requisitos a saber: *"1. Posesión material en el demandante. 2. Que la posesión se prolongue por el tiempo que exige la ley. 3. Que dicha posesión ocurra ininterrumpidamente. 4. Que la Cosa o derecho sobre la cual se ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse por prescripción"* (Sentencia de 13 de septiembre de 1980 M.P. Dr. Alberto Ospina Botero), en providencia más reciente, la misma Corporación Judicial, reafirmando los citados presupuestos adujo: *"Por sabido se tiene, según lo ha memorado la Sala, que los presupuestos estructurales en tratándose de prescripción adquisitiva de dominio que deben colmarse para su feliz desenlace son: (i) que se trate de un bien prescriptible, (ii) que el interesado en la adquisición demuestre que lo ha poseído de manera inequívoca, pacífica, pública e ininterrumpida, y (iii) que ese comportamiento lo haya sido por todo el tiempo legalmente exigido, el cual, hasta cuando entró en vigencia la Ley 791 de 2002 era de veinte años, reducido por ésta, a la mitad"* (Sentencia SC11786-2016 M.P. Dra. Margarita Cabello Blanco).

Descendiendo al sub examine, encontramos que se acude a la prescripción extraordinaria, ante la ausencia de justo título en cabeza del usucapiente, pues si bien, como ya se acoto, se habla de la existencia de un negocio jurídico "donación", el mismo no cumple la calidad de justo título - *para este evento traslativo* - entendido por éste, como aquél constituido conforme a la ley y susceptible de originar la posesión y transferir la propiedad, características de las que el referido negocio en este puntual caso adolece, si bien se tiene en cuenta, que tratándose de la donación de bienes inmuebles el artículo 1457 del Código Civil manifiesta: *"No valdrá la donación entre vivos, de cualquier especie de bienes raíces, si no es otorgada por escritura pública, inscrita en el competente registro de instrumentos públicos ..."*

Sumados a los requisitos referidos para la prescripción adquisitiva en general, cuando se trata de una declaración de dominio por la vía de la prescripción extraordinaria adquisitiva o de largo tiempo como doctrinariamente se le conoce, si bien no se exige la existencia de un justo título, si implica que el tiempo de posesión sea de 10 años mínimo, según la reforma introducida por la Ley 791 de 2002 al artículo 2531 del Código Civil, de forma ininterrumpida, sin violencia, clandestinidad ni ambigüedad y en ella se presume de derecho la buena fe.

Una vez lo anterior e iniciado el análisis del material probatorio que reposa en el expediente, a fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos que se anuncian en párrafos que anteceden, y en primer lugar de la posesión entendida en los términos del artículo 762 del C. C., como: *"la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo"*, encontramos tal como se sentó en líneas anteriores, que la relación jurídica del señor Lagos López, con el predio cuya formalización se reclama es de poseedor, y no de mero tenedor, situación que se acreditó con la información que obra en el expediente, que da cuenta no solo que aquél ostenta el *corpus* sino además el *animus* - *reconocidos elementos de la posesión* - pues ha ejercido actos de señor y dueño, sobre el predio denominado *"EL PLAN – SAN FRANCISCO"*, para corroborarlo basta con leer lo señalado en la declaración rendida por el mismo

señor solicitante, en la parte administrativa, quien sobre el particular depuso: *"yo me considero propietario, aunque no tengo escritura a nombre mio (...) este predio lo tengo mandando hace 16 años como entre los años 1999 y 2000 (...) mi papá PLACIDO ANDRES LAGOS, me lo regalo, esto fue de manera verbal, no firmamos ningún documento, pero mi papá si tiene la escritura del predio madre que mide 3 hectáreas, es la No. 198 del 18 de septiembre de 1977. (...) yo ahí hice mi casa, yo la construí, tiene paredes de ladrillo, techo es plancha, piso en cerámica tiene 2 cuartos cocina y sala, se cocina con gas y leña, (...) ahí tengo mi casa (...) "*, cuando se le cuestiona sobre si el predio contaba con servicios públicos cuando lo adquirió, el solicitante contesta: *"(sic) no yo le hice instalar, y llega a nombre mío la energía"*, así mismo al preguntarle sobre si la posesión ejercida sobre el predio ha sido ininterrumpida, asevera: *"sí, desde que mi papa me lo dio, empecé a mandar (sic) ene l predio, construí mi casa y todos saben que soy dueño, nunca he tenido problemas con nadie por nada"*; al indagarse sobre si llega al predio el impuesto predial, responde: *"sí, llega a nombre de mi papa y esta pagado, se encuentra al día"*, en cuanto al estado actual del inmueble, esgrime: *"yo vivo ahí"*. (Fol. 46 a 49).

Acorde con lo anterior, de la prueba testimonial recaudada en la misma etapa administrativa, se verifica que el hermano del solicitante, señor José Ramiro Lagos López, en su calidad de colindante del predio pretendido en el sub examine, expresó *"San Francisco"*, *(sic) eses es donde él vive, de ese predio es dueño más de 12 años, ese predio mi papá se lo dio para que trabaje, son como herencia, mi papá vive. Cuando mi papá le regaló el predio a mi hermano, solo era mero lote, por eso mi hermano construyo la casa (...) (sic) Ese predio nadie ha ido a reclamarle, el dueño es mi hermano, para cuando mi hermano sale desplazado, él era el que mandaba eso, es que para ese entonces ellos ya vivían. Los servicios públicos de esa casa los paga mi hermano"*; interrogado sobre si el solicitante ha tenido problemas de colindancias con el predio, el testigo depone: *"Como todos somos hermanos con ninguno ha tenido problemas"* (Fol. 52 a 53). El señor Plácido Andrés Lagos, padre del actor, quien rinde declaración por ser quien le donó el predio objeto de la presente demanda, sostuvo: *"San Francisco", El Plan, ese se lo repartí a mi hijo hace unos 14 años, cuando decidí regalárselo ese*

estaba de rastrojo, él lo limpio y le hizo la casa y le sembró unas maticas de café, de plátano, la casita la construyo él, de ahí fue pues que salió de ese desplazamiento. Lo que es el agua y la energía los paga él. (...) Los colindantes de ese predio de la casa, es María Rosario, José Ramiro, con Flavio Lagos, y (sic) conmigo, entre ellos mi hijo no ha tenido ningún tipo de problemas. (...) Ese predio que yo le regale a mi hijo nadie ha ido a reclamárselo (...)"(Fol. 54 a 55).

Continuando con el análisis probatorio, de la prueba documental se constató en el Informe Técnico de Georreferenciación en Campo (Fol. 57 a 58), en el Registro Fotográfico del predio (Fol. 59) y en el Informe Técnico Predial (Fol. 61 a 66) para cuya realización, las diligencias se atendieron por el solicitante Juanito Humberto Lagos López, la construcción de una edificación destinada para vivienda con muros en ladrillo, techo en placa de concreto y pisos en cerámica y la existencia de una huerta casera para el consumo del núcleo familiar a que se hace referencia párrafos atrás. Todo lo cual deja sentando, sin duda, el cumplimiento del requisito de la posesión ejercida por el solicitante.

En lo que respecta a *que el ejercicio de la posesión se prolongue por el tiempo que exige la ley*, tenemos que el término que se invoca en la solicitud de restitución es el establecido en el artículo 6 de la Ley 791 de 2002 - 10 años - lo cual resulta conveniente acorde a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 que señala que el demandante puede escoger la prescripción que más le convenga a su interés, cuando se establece que la misma inició bajo el imperio de una ley y no se hubiere completado aún al momento de promulgarse otra que la modifique, situación que aquí se satisface, pues en la demanda se aduce que el mismo fue adquirido hace aproximadamente 18 años, es decir, para el año de 1999 a 2000, cuando no se habían aun promulgado la Ley 791 de 2002.

Ahora bien, como por mandato de la citada Ley 153 de 1887, elegida la ley de prescripción actual, el término exige ser contabilizado desde la fecha en que esta hubiera empezado a regir, que para el caso de la ley 791, lo es el 27 de diciembre de 2002, contado desde dicha data, hasta la presentación de la solicitud el 2 de diciembre de 2016 (Fol. 98) tenemos que el ejercicio de la posesión se ha prolongado por más de 13 años, cumpliéndose a satisfacción, este requisito.

Así mismo, frente al requisito que el solicitante haya ejercido la posesión de *manera inequívoca, pacífica, pública e ininterrumpida* puede decirse que se encuentra enteramente cumplido, pues como sustento de lo anotado, tenemos que al ser interrogados si les consta que al actor alguien le haya reclamado la devolución del predio objeto del proceso o en su defecto si ha tenido problemas con el mismo, los testigos declararon, José Ramiro Lagos López: "*Como todos somos hermanos con ninguno ha tenido problemas*" (Fol. 52 a 53); Plácido Andrés Lagos: "*Los colindantes de ese predio de la casa, es María Rosario, José Ramiro, con Flavio Lagos, y (sic) con migo, entre ellos mi hijo no ha tenido ningún tipo de problemas. (...) Ese predio que yo le regale a mi hijo nadie ha ido a reclamárselo (...)*" (Fol. 54 a 55).

Conviene advertir además en este punto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, el abandono temporal del inmueble debido al desplazamiento forzado del poseedor no tiene la virtualidad de interrumpir el término de prescripción a su favor.

Probado también está que el bien inmueble *es susceptible de adquirirse por prescripción*, toda vez que el mismo es de naturaleza privada como ya se acotó, en atención a sus antecedentes registrales, siendo del caso agregar que en atención a lo contemplado en el Informe Técnico Predial aportado por la UAEGRTD, (Fol. 61 a 66) no se encuentra en una zona adyacente a Áreas Protegidas Nacionales como Parques Nacionales, Áreas Protegidas de Orden Regional y Local entre otras Áreas de Orden Nacional entendidas como Áreas Geográficamente Definidas, Reguladas y Administradas a fin de aclarar objetivos específicos de conservación; no se identifican corrientes o cuerpos hídricos que afecten el predio, ni colinda con vías públicas y que frente al uso del suelo si bien éste no coincide con el establecido en el EOT del Municipio de Los Andes Sotomayor, de acuerdo a la información cartográfica de reservas suministradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la zona micro focalizada por la citada URT, no se encuentra al interior de Zonas de Reserva Forestal por concepto de la Ley 2 de 1959, respecto a lo cual se manifiesta que se debe tener en cuenta que la regulación del suelo rural en los POT se debe armonizar con normas de superior jerarquía y que por ello la administración municipal debe

realizar el ajuste de su EOT de acuerdo con la delimitación vigente de la Zona de Reserva Forestal de la Ley 2, lo cual en su momento le fue ordenado realizar al Municipio de los Andes Sotomayor por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco, en sentencia del 25 de abril de 2017. Frente a este punto el Despacho considera pertinente exhortar al solicitante para que en lo sucesivo tenga en cuenta su uso acorde a las limitaciones de la zona, y al Municipio de los Andes Sotomayor para que tome las medidas de protección y adecuación que en el ejercicio de sus competencias considere pertinentes frente a su esquema de ordenamiento territorial.

De otro lado, se advirtió que de conformidad con el mapa No. 16 Susceptibilidad a Amenazas el cual hace parte del EOT del Municipio de Los Andes Sotomayor, el fundo pretendido se ubica en una zona de riesgo categorizada como moderada o natural por fenómenos hidrometeorológicos. Dicha situación conlleva a requerir a la Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor – Nariño a través de auto interlocutorio No. 210 de 7 de octubre de 2019 (Fol. 171 a 173), a efectos de obtener un pronunciamiento al respecto, y conocer si existen algunas restricciones que deban tenerse en cuenta.

Sobre este tópico el ente municipal mediante escrito allegado el 15 de noviembre de 2019 señaló que si bien la ubicación del predio denominado "*EL PLAN - SAN FRANCISCO*", no afecta ni entorpece el presente trámite judicial, es recomendable dar estricto cumplimiento a las recomendaciones que se encuentran en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres actualizado en julio de 2018 referente a riesgo por incendio. (Fol. 187 a 188).

Como puede observarse de esta respuesta, el predio reclamado no presenta afectación que impida su restitución, por lo tanto, se acoge la misma, sin lugar a ahondar por demás sobre dicha afectación.

Finalmente, debe advertirse que, si bien el fundo perseguido no alcanza la UAF, fijada para el caso del Municipio de Los Andes Sotomayor, entre 22 y 33 hectáreas,³ pues su área asciende a tan sólo 716 mts² lo que en principio podría

³ Resolución No. 041 de 1996. Zona relativamente homogénea No. 4. Zona Montañosa, centro occidental.

dar lugar a interpretar su imposibilidad de prescribir en atención al artículo 44 de la Ley 160 de 1994 que dispone: *"Salvo las excepciones que se señalan en el artículo siguiente, los predios rurales no podrán fraccionarse por debajo de la extensión determinada por el INCORA como Unidad Agrícola Familiar para el respectivo municipio o zona. En consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato, no podrá llevarse a cabo actuación o negocio alguno del cual resulte la división de un inmueble rural cuyas superficies sean inferiores a la señalada como Unidad Agrícola Familiar para el correspondiente municipio por el INCORA"*. De conformidad con lo considerado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, frente al artículo 44 de la Ley 160 de 1994, no existe imposibilidad de acceder a la prescripción, pues dicha Corporación, sobre el particular precisó: *"dicha normatividad alude al querer del legislador, salvo las excepciones establecidas en el canon 45 ibidem, de evitar el 'fraccionamiento' por debajo de la extensión determinada por el INCORA como Unidad Agrícola Familiar de los predios rurales, más no la imprescriptibilidad de los mismos"* (Sentencia proferida dentro de una acción de tutela el 2 de octubre de 2013). Por esta razón, Tribunales Superiores como los de Tunja (Sala Civil – Familia, Sentencia de 17 de noviembre de 2010) y Pasto (Sala Civil – Familia, Sentencia de 26 de enero de 2015 expedientes 2006-00019-01 (497-01) y 2011-00011-01 (502-01), han dejado sentado que: *"efectivamente sí es posible adquirir por prescripción las fases de terreno al margen de la menor área que tiene, aún en relación con las medidas mínimas de la UAF señaladas para la zona donde se encuentran ubicadas"*. Dicha postura es compartida por este Despacho, en el sentido de afirmar que no hay imposibilidad para acceder a la prescripción adquisitiva cuando el metraje se encuentre por debajo de la UAF, reforzando tal argumento si se quiere, con el señalamiento de que igual resulta pertinente acceder a ella, en tanto que la restitución de tierras y su formalización es un derecho de naturaleza superior y/o fundamental, que a la voz del derecho civil transicional, se encuentra jerárquicamente por encima del mandato legal restrictivo del artículo 44 de la Ley 160 de 1994 y en ese sentido se debe amparar, pues actuar de forma contraria, afectaría la esencia transformadora que la Ley 1448 de 2011 promulga a favor de la víctima basada en mandatos de derecho internacional, vinculantes en el ordenamiento jurídico colombiano.

En este orden de ideas, de lo reseñado se observa que se cumplen satisfactoriamente todos los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a la formalización del predio a través de la declaración de pertenencia, motivo por el cual en la parte resolutive se declarará el derecho de dominio sobre el predio denominado *"EL PLAN – SAN FRANCISCO"*, por haber sido adquirido por prescripción extraordinaria de dominio por el solicitante Juanito Humberto Lagos López, razón por la cual, se procederá de conformidad, con la aclaración de que conforme con el contenido del parágrafo 4 del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, el título del bien deberá entregarse a nombre de los dos cónyuges o compañeros permanentes, que al momento del desplazamiento forzado o despojo cohabitaban, por lo que en el presente asunto, se entregará a favor del señor Juanito Humberto Lagos López y de su esposa Ana Lucely Rojas Lagos.

Las demás súplicas de reparación integral tanto individuales como colectivas solicitadas por la UAEGRTD.

En lo que corresponde a las medidas de reparación integral, al quedar acreditado en el expediente todos los requisitos exigidos en la Ley 1448 de 2011, para ser acreedor a ellas, se accederá a la protección del derecho fundamental a la formalización de tierras a que tiene derecho el solicitante, y se despacharán favorablemente las PRETENSIONES A NIVEL INDIVIDUAL, en aras de garantizar su ejercicio y goce efectivo, de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, pero haciendo exclusión de las relacionadas en los numerales *"DÉCIMA TERCERA"* y *"DÉCIMA CUARTA"*, como quiera que ya fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia del 25 de abril de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00013 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco y que sin ninguna duda cobijan al solicitante y a su familia por hacer parte de dicha comunidad. Esto, con el fin de evitar duplicidad de decisiones, un desgaste institucional innecesario y establecer seguridad jurídica sobre aspectos, que ya fueron objeto de pronunciamiento judicial.

Ahora bien, en cuanto a las pretensiones del acápite denominado COMUNITARIO, respecto de las contenidas en los ordinales *"PRIMERA"*, *"SEGUNDO"* y *"NOVENO"*,

se dirá que ya fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia del 22 de junio de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00024 por el Juzgado Quinto de Descongestión Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto; las de los ordinales "TERCERO", "CUARTO", "QUINTO" y "SEPTIMO", fueron motivo de pronunciamiento en la sentencia del 25 de abril de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00013 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco y las de los ordinales "SEXTO", "OCTAVO" y "DÉCIMA", fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia del 18 de agosto de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00033 por el Juzgado Cuarto de Descongestión Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto, por lo que se estará a lo resuelto en aquellas decisiones, mismas que sin duda alguna cobijan al actor y a su familia por hacer parte de dicha comunidad. Ello, con el objeto de evitar duplicidad de decisiones, un desgaste institucional innecesario y establecer seguridad jurídica sobre aspectos, que se repite, en otrora ya fueron objeto de pronunciamiento judicial.

Sobre las pretensiones enfiladas a que se ordene la restitución material del predio, se advierte que no hay lugar a ser concedida, pues quedó acreditado que el señor Juanito Humberto Lagos López, retornó al predio y habita en la actualidad el inmueble, en donde construyó su casa, explotándolo hasta hoy, sin haber presentado más desplazamientos ni amenazas, de allí que carezca de objeto.

Finalmente, en lo atinente a las solicitudes especiales, habrá de advertirse que fueron parte de la etapa anterior a la presente decisión, razón por la cual en este momento procesal no hay lugar a pronunciarse sobre ellas.

Conclusión

En consecuencia, al quedar debidamente acreditada la condición de víctima del señor Juanito Humberto Lagos López, en el contexto del conflicto armado interno,

en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011; la configuración de los hechos violentos transgresores del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos dentro de la temporalidad exigida en el artículo 75 de la norma ibidem; y la relación jurídica con el bien cuya formalización se pide en calidad de poseedor, en la parte resolutive de este proveído se accederá al amparo de los derechos fundamentales a la restitución y formalización de tierras a que tiene derecho el solicitante, declarándole propietario por haber adquirido por la vía de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, del predio denominado "*EL PLAN - SAN FRANCISCO*", de igual manera se despacharán favorablemente las medidas de protección integral solicitadas, con las excepciones anteriormente descritas.

Finalmente, y en ejercicio a las facultades legales y constitucionales que le atañen a este Juzgado, se prevendrá al Municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño a efectos de que se acaten los Objetivos Específicos de Gestión del Riesgo y se implementen las Estrategias de Gestión del Riesgo, en donde se determinen medidas para identificar, hacer seguimiento y control, implementar programas de educación ambiental y se ponga en marcha el Plan Municipal de Gestión del Riesgo; como medidas de intervención destinadas a mitigar, reducir el riesgo y prepararse para la respuesta a emergencias y su posterior recuperación, en cuanto a las amenazas y riesgos presentados en el predio objeto de la presente restitución, según la documentación y cartografía del EOT del Municipio, señaladas en el Informe Técnico Predial que reposa a folios 61 a 66 del expediente.

Así mismo, se exhortará al solicitante y a la UAEGRTD, para que, en lo atinente al proyecto productivo a implementarse en el predio, se tenga en cuenta la reglamentación del uso del suelo.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto - Nariño**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, profiere la siguiente,

IV. Decisión:

Primero. Amparar los derechos fundamentales a la restitución y formalización de tierras del señor Juanito Humberto Lagos López, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes – Nariño en calidad de poseedor, y el de su núcleo familiar que al momento del desplazamiento forzado estaba conformado por su compañera permanente hoy cónyuge, Ana Lucely Rojas Lagos, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.089.243.627 expedida en Los Andes - Nariño y su hija Darlin Yulied Lagos Rojas, identificada con tarjeta de identidad No. 1.087.728.109 expedida en Los Andes – Nariño, respecto del predio denominado "*EL PLAN - SAN FRANCISCO*", ubicado en la Vereda San Francisco, del Corregimiento La Planada, del Municipio de Los Andes Sotomayor, del Departamento de Nariño, el cual hace parte de un predio de mayor extensión, el que se encuentra registrado a folio de matrícula inmobiliaria 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño y posee la cédula catastral No. 52-418-00-00-00-0000-6872-0-00-00-0000.

Segundo. Declarar que el señor Juanito Humberto Lagos López, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes – Nariño y su cónyuge Ana Lucely Rojas Lagos, identificada con tarjeta de identidad No. 1.087.728.109 expedida en Los Andes – Nariño han adquirido por la vía de **Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio** el predio denominado "*EL PLAN - SAN FRANCISCO*", con extensión de 0 Hectáreas y 716 mts², ubicado en la Vereda San Francisco, del Corregimiento La Planada, del Municipio de Los Andes Sotomayor, del Departamento de Nariño, el cual hace parte de un predio de mayor extensión, que se encuentra registrado a folio de matrícula inmobiliaria 250-1278 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño y posee la cédula catastral No. 52-418-00-00-00-00-0000-6872-0-00-00-0000.

Las coordenadas georreferenciadas y linderos especiales del predio aportados por la UAEGRTD y que se deben tener en cuenta, son los siguientes:

LINDEROS ESPECIALES

LINDEROS Y COLINDANTES DEL TERRENO O PREDIO SOLICITADO	
De acuerdo a la información fuente relacionada en el numeral 2.1 para la georreferenciación de la solicitud se establece que el predio solicitado en inscripción en el Registro de Tierras Despojadas se encuentra alinderado como sigue:	
NORTE:	Partiendo desde el punto 1 en línea recta, en dirección oriente hasta llegar al punto 2 con predio de Placido Lagos, en una distancia de 28,8 mts.
ORIENTE:	Partiendo desde el punto 2 en línea recta, en dirección sur hasta llegar al punto 3 con la entrada del predio de la familia Lagos, en una distancia de 24,1 mts.
SUR:	Partiendo desde el punto 3 en línea recta, en dirección occidente hasta llegar al punto 4 con predio de Rosario Lagos, en una distancia de 27,1 mts.
OCCIDENTE:	Partiendo desde el punto 4 en línea recta, en dirección norte hasta llegar al punto 1 con predio de Flavio Jesus Lagos, en una distancia de 27,6 mts.

COORDENADAS GEORREFERENCIADAS

PUNTO	COORDENADAS PLANAS		COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
	NORTE	OESTE	LATITUD (°)	LONGITUD (°)
1	663259,5297	952265,6107	1° 33' 4,448" N	77° 30' 23,275" O
2	663323,1905	952282,0706	1° 33' 5,218" N	77° 30' 22,743" O
3	663307,9244	952300,6647	1° 33' 4,721" N	77° 30' 22,141" O
4	663283,85	952288,2805	1° 33' 3,937" N	77° 30' 22,542" O

Tercero. Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño lo siguiente:

3.1. Levantar las medidas de protección que obran en el folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278, en las anotaciones identificadas con el número 10 y 11 y cualquier otra medida cautelar decretada en la etapa administrativa o judicial con ocasión a este proceso.

3.2. Desenglobar del folio de matrícula inmobiliaria No. 250-1278 el predio denominado *"EL PLAN - SAN FRANCISCO"*, cuyas dimensiones, linderos y coordenadas reposan en el numeral segundo de la presente providencia.

3.3 Abrir un nuevo folio de matrícula inmobiliaria en el cual se inscribirá la presente sentencia, en la que se declara el dominio a favor del señor Juanito Humberto Lagos López, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes – Nariño, y de su cónyuge señora Ana Lucely Rojas Lagos por la vía de la Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio del predio denominado *"EL PLAN - SAN FRANCISCO"*, ubicado en la Vereda San Francisco,

del Corregimiento La Planada, del Municipio de Los Andes Sotomayor, del Departamento de Nariño.

3.4 Inscribir en el nuevo folio de matrícula inmobiliaria que corresponda al predio denominado "*EL PLAN - SAN FRANCISCO*", la prohibición de enajenación a cualquier título y por cualquier acto del bien inmueble, por un lapso de dos años contados desde la ejecutoria de este fallo, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011.

3.5 Dar aviso de lo anterior al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, en cumplimiento del mandato consignado en el artículo 50 de la Ley 1579 de 2012.

Todo lo anterior aplicando el criterio de gratuidad señalado en el parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011.

Por Secretaría se procederá a comunicar lo decidido en precedencia a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego - Nariño, junto con la copia de los Informes Técnico Predial y de Georreferenciación del bien, aportados con la solicitud.

Cuarto. Ordenar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, que dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del aviso remitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Samaniego – Nariño sobre el registro de la presente providencia, proceda a la asignación de código catastral independiente del inmueble descrito en el numeral segundo de la parte resolutive de esta sentencia, que hacía parte del predio de mayor extensión al que le corresponde el código catastral No. 52-418-00-00-00-0000-6872-0-00-00-0000, efectuando la respectiva actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos.

Por secretaría remitir copia de los Informes Técnico Predial y de Georreferenciación del bien, aportados con la solicitud.

Quinto. Ordenar a la Alcaldía municipal de Los Andes Sotomayor - Nariño, en los términos del artículo 121 de la Ley 1448 de 2011, aplicar en favor del

solicitante los mecanismos de alivios, condonación y/o exoneración de pasivos que tenga previstos para víctimas del desplazamiento forzado frente al impuesto predial unificado generado durante la época del desplazamiento respecto al predio descrito en el numeral primero de esta providencia. De igual manera procederá a actualizar sus bases de datos, una vez cuente con el código que le asigne el IGAC al predio, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutive de esta sentencia.

Sexto. Ordenar al representante legal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas – UARIV si no se ha realizado, incluir en el Registro Único de Víctimas RUV, al señor Juanito Humberto Lagos López, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes – Nariño y a su núcleo familiar conformado al momento del desplazamiento por su compañera permanente hoy cónyuge, Ana Lucely Rojas Lagos, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.089.243.627 expedida en Los Andes - Nariño y su hija Darlin Yulied Lagos Rojas, identificada con tarjeta de identidad No. 1.087.728.109 expedida en Los Andes – Nariño, por el desplazamiento forzado sufrido con ocasión de este proceso de restitución.

Séptimo. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD lo siguiente:

a) efectuar si no se hubiere realizado y sólo de ser procedente desde el punto de vista legal, un estudio sobre la viabilidad de implementar proyectos productivos en el inmueble que se restituye en la presente providencia, teniendo en cuenta para ello la vocación y uso racional del suelo, así como sus posibles afectaciones. En caso de darse dicha viabilidad, deberá proceder a beneficiar al solicitante y a su núcleo familiar con la implementación del mismo **por una sola vez**.

Para verificar lo relativo al uso de suelos, dado que la UAEGRTD corroboró que el inmueble no se encuentra dentro del área de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico delimitada por la Ley 2ª de 1959, de acuerdo con la Resolución No. 1926 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no se tendrá en cuenta la reglamentación de uso de suelos que aparece en el Esquema de Ordenamiento

Territorial del Municipio de Los Andes Sotomayor, sino la información que le será requerida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia, a la Corporación Autónoma Regional de Nariño y a la Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor – Nariño, en el siguiente numeral de esta providencia.

b) Verificar si el solicitante Juanito Humberto Lagos López, cumple los requisitos consignados en el artículo 45 del Decreto 4829 de 2011 y artículo 2.15.2.3.1 del Decreto 1071 de 2015. De ser así, en acatamiento de lo dispuesto en aquellas normas, deberá postular a la persona prenombrada, mediante resolución motivada y con carácter preferente, dentro de los subsidios de vivienda rural, administrado actualmente por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR, tal como lo establece el artículo 8 del Decreto 890 de 2017.

Octavo. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia, a la Corporación Autónoma Regional de Nariño y a la Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor – Nariño, para efectos de viabilizar el cumplimiento de lo ordenado en el literal a) del numeral anterior, atendiendo el principio de coordinación y colaboración armónica entre las entidades del Estado, que, en el término de quince (15) días siguientes a la comunicación de esta decisión, procedan a rendir un informe en el que se establezca si el predio comprometido en el proceso tiene alguna restricción de carácter ambiental que impida la implementación de un proyecto productivo.

Una vez se alleguen los informes requeridos, por secretaria se procederá inmediatamente a su remisión a la UAEGRTD, a efectos de que acate lo dispuesto en el literal a) del numeral anterior.

Noveno. Ordenar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, que en caso de recibir la información proveniente de la UAEGRTD en cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del numeral séptimo, proceda a efectuar un estudio, aplicando los criterios diferenciales de que trata la Ley 1448 de 2011, que le permita determinar el tipo de subsidio familiar de vivienda de interés social rural que debe ser asignado al solicitante **por una sola vez**, bien sea de mejoramiento

o de construcción, según corresponda. Aunado a lo anterior, deberá determinar el lugar donde resulte procedente otorgar dicho beneficio para el solicitante, por ser ello de su exclusiva competencia.

Décimo. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social si no se ha realizado, incluir al señor Juanito Humberto Lagos López, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes – Nariño y a su núcleo familiar conformado por su cónyuge Ana Lucely Rojas Lagos, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.089.243.627 expedida en Los Andes - Nariño y sus hijas Darlin Yulied Lagos Rojas, identificada con tarjeta de identidad No. 1.087.728.109 expedida en Los Andes – Nariño y Maira Liced Lagos Rojas, identificada con tarjeta de identidad No. 1.180.463.088 expedida en Los Andes – Nariño en el programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas - PAPSIVI, en sus modalidades individual, familiar y comunitaria respectivamente a fin de superar el impacto causado por los hechos victimizantes.

Décimo Primero. Ordenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, a la Gobernación de Nariño, a la Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor – Nariño y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA que dentro del marco de sus competencias y si aún no lo han hecho, procedan a Incluir al solicitante Juanito Humberto Lagos López, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.348.605 expedida en Los Andes – Nariño, y a su cónyuge Ana Lucely Rojas Lagos, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.089.243.627 expedida en Los Andes - Nariño en todos los programas, planes, proyectos y acciones que tengan disponibles para atender a la población víctima del conflicto armado, teniendo en cuenta las necesidades propias de su núcleo familiar.

En particular, las entidades referidas deberán adelantar las siguientes acciones en aras de hacer efectivos los derechos de las personas mencionadas:

a) El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, determinar, de forma prioritaria a qué programas de esa entidad pueden tener acceso el solicitante y su cónyuge y adelantar las gestiones pertinentes para su inclusión.

b) La Gobernación de Nariño, la Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor - Nariño y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en caso de que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD beneficie al solicitante con la implementación de un proyecto productivo, dentro del ámbito de sus competencias y en cumplimiento del principio de coordinación armónica que informa a la Ley 1448 de 2011, efectuar el acompañamiento adecuado para tal fin, en especial, para lograr la comercialización de sus productos, a través, por ejemplo, de asistencia técnica, financiación, etc.

Décimo Segundo. Ordenar al representante legal Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas – UARIV para que en coordinación con las entidades que hacen parte del SNARIV, integren al señor Juanito Humberto Lagos López y a su núcleo familiar a la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral en el marco del conflicto armado interno, previo el cumplimiento de los requisitos que para cada caso disponga la ley.

Décimo Tercero. Ordenar que por Secretaría se remita copia de la presente decisión al Centro Nacional de Memoria Histórica para que en el marco de sus funciones acople y documente los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno descritos en esta providencia.

Décimo Cuarto. Advertir que será ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, cualquier negociación por acto entre vivos del predio restituido y formalizado por medio de la presente sentencia que ocurra dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a menos que se obtenga la autorización previa, expresa y motivada de este Despacho conforme lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011.

Décimo Quinto. Estar a lo resuelto en la sentencia del 25 de abril de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00013 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco, frente a las pretensiones de contenido individual de los ordinales

"DÉCIMA TERCERA" y "DÉCIMA CUARTA", conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

Décimo Sexto. Estar a lo resuelto en las siguientes sentencias, respecto de las pretensiones de contenido comunitario de los ordinales "PRIMERA", "SEGUNDO", "TERCERO", "CUARTO", "QUINTO", "SEXTO", "SEPTIMO", "OCTAVO", "NOVENO" y "DÉCIMA", formuladas por la UAEGRTD en el escrito de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia:

- "PRIMERA", "SEGUNDO" y "NOVENO", sentencia del 22 de junio de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00024, por el Juzgado Quinto de Descongestión Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto.

- "TERCERO", "CUARTO", "QUINTO" y "SEPTIMO", sentencia del 25 de abril de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00013, por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco.

- "SEXTO", "OCTAVO" y "DÉCIMA", sentencia del 18 de agosto de 2017, dictada dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 2016-00033, por el Juzgado Cuarto de Descongestión Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto.

Décimo Séptimo. Negar las pretensiones encaminadas a que se ordene la restitución material, conforme a lo expuesto en precedencia.

Décimo Octavo. Sin lugar a atender las solicitudes especiales incoadas, de acuerdo con las consideraciones que anteceden.

Décimo Noveno. Prevenir al Municipio de Los Andes Sotomayor – Nariño a efectos de que se acaten los Objetivos Específicos de Gestión del Riesgo y se implementen las Estrategias de Gestión del Riesgo, en donde se determinen

medidas para identificar, hacer seguimiento y control, implementar programas de educación ambiental y se ponga en marcha el Plan Municipal de Gestión del Riesgo; como medidas de intervención destinadas a mitigar, reducir el riesgo y prepararse para la respuesta a emergencias y su posterior recuperación, en cuanto a las amenazas y riesgos presentados en el predio objeto de la presente restitución, conforme lo expuesto en precedencia.

Vigésimo. Exhortar al señor Juanito Humberto Lagos López y a su grupo familiar, para que en lo sucesivo tenga en cuenta el uso del suelo del predio que se le formaliza y a su vez se **Exhorta** a la Alcaldía Municipal de Los Andes Sotomayor para que tome las medidas de protección y adecuación del referido esquema, que en el ejercicio de sus competencias considere pertinentes, atendiendo a la orden que le fue dada en la sentencia del 25 de abril de 2017, por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Tumaco, dentro del proceso de restitución de tierras radicado bajo el número 2016-00013.

Vigésimo Primero. Exhortar al señor Juanito Humberto Lagos López y a la UAEGRTD, para que, en lo atinente al proyecto productivo a implementarse en el predio, se tenga en cuenta la reglamentación del uso del suelo, de acuerdo a lo considerado en la parte motiva de esta sentencia.

Vigésimo Segundo. Término de cumplimiento de las ordenes e informes: salvo lo resuelto en contrario, las ordenes aquí emitidas deberán acatarse en un término no superior a un (01) mes y para verificar el cumplimiento de las mismas, deberán las entidades e instituciones aquí involucradas rendir informe detallado del avance de la gestión dentro del término de dos (02) meses, contados desde la notificación del presente proveído ante este Juzgado. Para tales efectos, remitir copia de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase


PAOLA ANDREA GUERRERO OSEJO

Juez